



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

44ª REUNION — 4ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA —
FEBRERO 8 Y 9 DE 1995

PRIMERA PARTE

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Carlos Alberto Romero y Carlos Ernesto Soria

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Angel Leónidas
ABIHAGGLE, Carlos Enrique
ACENOLAZA, Florencio Gilberto
ALBAMONTE, Alberto G.
ALCALA, Néstor Ricardo
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ÁLVAREZ, Carlos Raúl
ÁLVAREZ ECHAGÜE, Raúl Ángel
ÁLVAREZ GARCÍA, Normando M.
ANTELO, José María
ARAGONES de JUÁREZ, Mercedes
ARANDA, Saturnino Dantti
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDÁRIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Susana Beatriz
AYETZ, Liliana
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BARBERA, Eliseo
BARBOTTI, Adilio Ector
BARRIONUEVO, Eduardo E.
BAUM, Daniel
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BENZI, María Cristina
BERMÚDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BISCHOF, Enrique Alberto
BONINO, Miguel Ángel
BONOMI, Silvia Mónica
BORDA, Osvaldo
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRUZZO, Omar Odulio
BULLRICH, Patricia
CABIRÓN, Juan Carlos
CALLADA, Aníbal
CAMANO, Eduardo Oscar
CAMARA, Mario Ángel
CAMPERO, Rodolfo Martín
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Carlos José
CONCHUELO BLASCO, José M.
CROSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel

D'AMEROSIO, Angel Mario
DAUD, Jorge Carlos
D'ELIA, Roberto Antonio
DEL FABRO, Lilián
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DIGÓN, Roberto Secundino
DI TULLIO, Héctor Horacio
DONNI, Luisa Cristina
DRISALDI, María Rita
DUMÓN, José Gabriel
DURASONA y VEDIA, Francisco de
DURRIEU, Marcela Margarita
FABRISSIN, Carlos Alberto
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo
FERNÁNDEZ MEJIDE, Graciela
FIGUEROA, Pedro Octavio
FOLLONI, Jorge Oscar
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge
GARCÍA MORENO, Miguel Ángel
GAUNA, Juan Octavio
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIMÉNEZ, Délfior Abel
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GOLPE, Carlos Horacio
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GONZÁLEZ, Antonio Erman
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
GUZMÁN, María Cristina
HARDY, Aníbal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERRERA ARIAS, Manuel H.
HUMADA, Raúl
IBARRIA, José María
IBARRECHE, Julio César
ITURBE, César E. del Valle
JAUNARENA, José Horacio
KAMMERATH, Germán Luis
KELLY, Elsa Diana Rosa
KESSLER, Ana Raquel
LAFALLA, Arturo Pedro
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
MACEDO, Horacio Antonio

MACHADO, Oscar Alfredo
MAIDANA, Elsa Ignacia
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCOS, Ricardo Ernesto
MATZKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, Martín
MENEM, Carlos Omar
MERCADER, Martha Evelina
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MICHELLI, Marco Aurelio
MICHITTE, Salomón Antonio
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRALLES de ROMERO, Norma
MOLARDO, Elvio Francisco
MOLINAS, Ricardo Francisco
MONTIEL, Sergio Alberto
MÜLLER, Mabel Hilda
MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
MUÑOZ, Marcelo Bernardo
NEDEH, Jorge Humberto
NEGRÍ, Mario Raúl
NIEVA, Alejandro Mario
NISO, Jorge
NOVAU, Pedro José
ORGÁZ, Carlos Alfredo
ORQUIN, Leopoldo Manuel
ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
PARADA, Alberto
PARAJÓN, José María
PAROLA, José María
PASCUAL, Rafael Manuel
PATTERSON, Ricardo Anceil
PÉLAEZ, Víctor
PERNASSETTI, Horacio F.
PERRINI, Gioconda Eutalla
PICHETTO, Miguel Ángel
PIERRI, Alberto Reinaldo
PINTO, Guillermo
POLINO, Héctor Teodoro
RÉ, Ricardo Horacio
RODRÍGUEZ, Jesús
RODRÍGUEZ, Mabel E.
RODRÍGUEZ SANUDO, Hugo B.
ROIG, Angel
ROJO, Rubén Darío
ROMERO, Carlos Alberto
ROMERO, Humberto Antonio
ROY, Irma
RUBINI, Mirta Elsa
RUIZ PALACIOS, José David
SALINO, María Antonia

SAMMIETRO, Darci
SANTIN, Eduardo
SEBASTIANI, Claudio A.
SMITH, Santos
SOBRINO, Margarita María
SOLANAS, Fernando E.
SORIA, Carlos Ernesto
SPINOSA, Augusto Juan
STORANI, Federico.
SUCARIA, Noyef
SUERO, Carlos Adolfo
TEODOSIU, Jorge Nicolás
TOGNI de VELY, Adriana
TOLOMEO, Leonor Ester
TOMA, Miguel Ángel
TOTO, Francisco Patricio
TRETTEL MEYER, Raúl
TROYANO, Silvia Elena
USANDIZAGA, Horacio Daniel
VALCARCEL, Juan Manuel
VARELA CID, Eduardo
VÁZQUEZ, Roberto
VÁZQUEZ, Silvia Beatriz
VENESIA, Gualberto Edgardo
VICCHI, Raúl Horacio
VIGLIONE, Atilio Oscar

AUSENTES, CON LICENCIA:

CORDERA, Rogelio Rafael
KAHLER, Ernesto Rolando
SCHIARETTI, Juan
TERRAGNO, Rodolfo Héctor

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

BRESER, Adalberto Edgardo

BRUNELLI, Naldo Raúl A.
CARCA, Elisa Beatriz
CASARI de ALARCIA, Leonor
CEBALLOS, Walter Alberto
CLOSS, Ramón Alberto
FAYAD, Víctor Manuel
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KOTH, Carlos
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio R.
MENEGBINI, Javier Reynaldo
NACUL, Miguel Camel
OLIVERA, Enrique José
PEPE, Lorenzo Antonio
PERALTA, Aníbal Pedro
PÉREZ, Jorge Felino
PESCE, Félix
PRAT, Alfredo Ernesto
ROGGERO, Humberto Jesús
SAADI, Ramón Eduardo
SÁNCHEZ GALDEANO, Roque
ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, CON AVISO:

ACHEM, Antonio
ADAIME, Felipe Teófilo
ALBERTI, Juan Carlos
ALENDE, Oscar Eduardo
ÁLVAREZ, Carlos Alberto
BENEDETTI, Jorge Enrique
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BRAVO, Alfredo Pedro
BUSSI, Antonio Domingo
CASTILLO, Oscar Aníbal
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E.

FALLETTI, Julio César José
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FLORES, Rafael Horacio
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GARAY, Nicolás Alfredo
GIOJA, José Luis
GOLPE, Néstor Lino
GUERRERO, Luis Serafín
HERRERA, Bernardo Eligio
LAHOZ, José Fernando
LOSADA, Luis Enrique
LYNCH, Carlos Alberto
LLOPIS, Enrique Raúl
MANFREDOTTI, Carlos
MARCOLLI, Juan Miguel A.
MARTÍNEZ, Esteban
MARTÍNEZ, Manuel Luis
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MATHOV, Enrique José
MOREAU, Leopoldo Raúl
MORELLO, Emilio Pedro
MURIEL, Néstor Jorge
NATALE, Alberto Adolfo
PELLIN, Osvaldo Francisco
PICCININI, Ana Ida
POLO, Luis Nicolás
RICO, Aldo
RODRIGO, Esteban Joaquín
RODRÍGUEZ, José
SARQUIZ, José Alberto
SCELZI, Carlos José
TENEV, Carlos
TOPA, Raúl Roque
VARELA, Néstor Ángel
VITAE, José Alberto
ZAVALLA, José Luis
ZICARELLI, Orlando A.

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la sesión preparatoria de fecha 11 de mayo de 1994.

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría y pase de lista. (Página 5320.)
2. Izamamiento de la bandera nacional. (Pág. 5321.)
3. Consideración de la renuncia a su banca presentada por el señor diputado del distrito electoral de San Juan, don Jorge Alberto Escobar. Se acepta. (Página 5321.)
4. Juramento e incorporación de la señora diputada del distrito electoral de San Juan, doña Leonor Ester Tolomeo. (Pág. 5321.)
5. Diario de Sesiones. (Pág. 5321.)
6. Asuntos entrados: resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo. (Pág. 5322.)
7. Licencias para faltar a las sesiones de la Honorable Cámara. (Pág. 5322.)
8. Diferimiento de los términos reglamentarios destinados a homenajes y a pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de tratamiento sobre tablas. (Pág. 5322.)

9. Plan de labor de la Honorable Cámara. (Pág. 5323.)
10. Dictámenes sin disidencias ni observaciones por los que se aconseja la sanción de proyectos de ley, de resolución o de declaración. (Pág. 5324.)

I. Dictamen de las comisiones de Legislación General, de Justicia y de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley del señor diputado Garay por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el paraje Villa Furst, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires (2.018-D-94). (Página 5325.)

II. Dictamen de las comisiones de Industria y de Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de los señores diputados D'gón y Pesce por el que se solicita la publicación de un informe anual de tecnología industrial por la Secretaría de Industria y sus organismos dependientes (4.270-D-94). (Pág. 5326.)

III. Dictamen de las comisiones de Cultura, de Educación, de Obras Públicas y de Asuntos Municipales en el proyec-

CVI. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración del señor diputado Trettel Meyer por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga instrumentar exposiciones itinerantes con los patrimonios que componen las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes y del interior del país (5.197-D-94). (Página 5510.)

CVII. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución del señor diputado Bracchi por el que se solicita tributar homenaje al doctor Arturo Jauretche mediante la colocación de una placa recordatoria en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires (5.247-D-94). (Pág. 5512.)

CVIII. Dictamen de la Comisión de Juicio Político en los pedidos de promoción de causa al señor juez de cámara doctor Carlos Elbert, formulado por el señor diputado Varela Cid y otros, y a los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, doctores María Cristina Camiña, Carlos A. Elbert y Carmen Argibay, formulado por los señores Víctor D. Bulacio y Graciela Scavone de Bulacio (3.531-D-92 y 158-P-92). Se sanciona un proyecto de resolución. (Pág. 5513.)

CIX. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre los asuntos a los que se refieren los números 10.1 a 10.CVIII de este sumario. Se sancionan. (Página 5515.)

11. Moción de orden formulada por el señor diputado Ganna de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del proyecto de ley del que es coautor por el cual se declara la nulidad del decreto 2.302/94, que paraliza los reclamos administrativos y causas judiciales promovidos contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (5.721-D-94). Es rechazada. (Pág. 5515.)

12. Moción de orden formulada por el señor diputado Barbotti de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del asunto al que se refiere el número 14 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 5516.)

13. Moción del señor diputado Barbotti de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 14 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 5517.)

14. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se observa totalmente la ley 24.416, de creación del Fondo de Emergencia Agropecuaria

(68-P.E-94). Se confirma la sanción de la Honorable Cámara. (Pág. 5517.)

15. Moción de orden formulada por el señor diputado Storani de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de tratamiento sobre tablas el asunto al que se refiere el número 16 de este sumario. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 5518.)

16. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los proyectos de declaración de los señores diputados Albamonte y otros (5.713-D-94), Kessler (5.714-D-94), Negri (5.717-D-94), Pesce (5.723-D-94), Corchuelo Blasco (5.730-D-94), Storani y otros (5.736-D-94), Aranda (5.740-D-94), Polino y otros (5.776-D-94) y Roy (5.785-D-94), y en el proyecto de resolución del señor diputado Mendoza (C.R.) (5.755-D-94), por los que se expresa preocupación y se exhorta a la solución pacífica del conflicto armado entre las repúblicas del Perú y Ecuador. Se sancionan un proyecto de resolución y otro de declaración. (Página 5519.)

17. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social y de Justicia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen de solidaridad previsional y reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (55-P.E-94). Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 5549.)

18. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 5561.)

B. Asuntos entrados:

I. Mensajes del Poder Ejecutivo. (Pág. 5633.)

II. Comunicaciones del Honorable Senado. (Página 5635.)

III. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 5636.)

IV. Dictámenes de comisiones. (Pág. 5637.)

V. Dictámenes observados. (Pág. 5644.)

VI. Comunicaciones de comisiones. (Pág. 5644.)

VII. Comunicaciones de señores diputados. (Página 5645.)

VIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 5645.)

IX. Peticiones particulares. (Pág. 5655.)

X. Proyectos de ley. (Pág. 5657.)

XI. Proyectos de resolución. (Pág. 5659.)

XII. Proyectos de declaración. (Pág. 5665.)

XIII. Licencias. (Pág. 5669.)

C. Inserción solicitada por el señor diputado Molinas. (Pág. 5670.)

D. Asistencia de los señores diputados a las sesiones de la Honorable Cámara (mes de mayo de 1994). (Pág. 5671.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: teniendo en cuenta la muy atinada solicitud del señor diputado Matzkin, diré en forma brevísima que en anteriores intervenciones parlamentarias sobre cuestiones vinculadas con la política exterior expresé mi opinión acerca de cómo establece nuestra Constitución la gestión en relación con dicha política.

Por tal motivo no abundaré en esas consideraciones y me limitaré a votar afirmativamente una declaración de este cuerpo que encuentre correctamente redactada. Por el contrario, me opongo a la iniciativa por la que se propone la creación de comisiones o delegaciones de esta Cámara para cuestiones concretas sobre política exterior.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chaco.

Sr. Mendoza (C. R.). — Señor presidente: solicito que se incluya como antecedente de este dictamen un proyecto de resolución de mi autoría, que figura en el expediente 5.755-D.-94.

En su artículo 5º se solicita que las repúblicas de Perú y Ecuador respeten, en el caso de los prisioneros de guerra, las normas humanitarias de derecho internacional que fueron aprobadas en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1957.

Sr. Presidente (Pierri). — Si hay asentimiento de la Honorable Cámara se incluirán como antecedentes del dictamen el proyecto de resolución del señor diputado Claudio Mendoza (expediente 5.755-D.-94) y los proyectos de declaración del señor diputado Polino y otros (5.776-D.-94) y de la señora diputada Roy (expediente 5.785-D.-94).

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Storani. — Señor presidente: en vista de la alusión realizada por el señor diputado Maqueda, deseo aclarar que no está en mi ánimo agraviar a persona alguna.

Vale la pena hacer el relato de lo que sucedió. Se tomaron en cuenta todos los proyectos y se llegó a un consenso; se consultó a la Cancillería —lo hice personalmente, señor diputado Durañona y Vedia—, que consideró útil la intervención de una delegación parlamentaria que tomara contacto con colegas tanto ecuatorianos como peruanos.

Sabemos que hasta el momento las gestiones fueron infructuosas, pero considero que no es redundante hacer más gestiones cuando se persigue un objetivo tan importante como el que nos planteamos. Nadie espera resultados espectaculares.

Estamos aquí desde hace muchas horas —personalmente estoy desde las seis de la tarde—, pero no es posible que por la premura en sancionar algunas leyes por las que existe interés y para cuya aprobación contribuimos con la conformación del quórum necesario, se pretenda votar este proyecto sin que se formulen mínimas expresiones sobre el particular por parte de algunos integrantes de esta Cámara.

Además, ése había sido el procedimiento acordado con la bancada Justicialista. Llegamos a un dictamen integrado por dos proyectos: uno de declaración y otro de resolución, y convinimos dos intervenciones: la del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y la de su vicepresidente, que es quien habla.

Esas son las razones por las cuales sostenemos que no debe votarse la iniciativa sin dar lugar a un debate previo. No existe un ánimo de agravio; tratamos de preservar un objetivo superior y ratificamos que nuestra vocación es hacer todo lo posible, aunque inicialmente sea infructuoso, para lograr que este conflicto se detenga.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el proyecto de declaración.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de declaración¹.

Se va a votar el proyecto de resolución.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de resolución².

17

REGIMEN DE SOLIDARIDAD PREVISIONAL (Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social y de Justicia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Régimen de Solidaridad

¹ y ² Véase el texto de las sanciones en el Apéndice (Págs. 5622 y 5633.)

Previsional y reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (expediente 55-P.E.-94) ¹.

La Presidencia hace saber que la mayoría de los miembros de las comisiones intervinientes ha introducido modificaciones al articulado del proyecto de ley aprobado en general. Dicho texto ha sido distribuido a los señores diputados y, en consecuencia, es el que será puesto a consideración en particular a la Honorable Cámara.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TÍTULO I

De las reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

CAPÍTULO I

Reformas a la legislación previsional

Artículo 1º —

1. Los sistemas públicos de previsión de carácter nacional son sistemas de reparto asistido, basados en el principio de solidaridad.
2. Las prestaciones otorgadas o a otorgarse por dichos sistemas serán financiadas con los recursos enumerados en el artículo 18 de la ley 24.241, y quedan sometidas a las normas que sobre haberes mínimos y máximos incompatibilidades y movilidad establece la ley 24.241.
3. El Estado nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones de dichos sistemas, hasta el monto de los créditos presupuestarios expresamente comprometidos para su financiamiento por la respectiva ley de presupuesto.

El monto de los créditos presupuestarios anuales destinados al financiamiento del régimen previsional público no podrá ser inferior a lo asignado en la ley de presupuesto 24.447.

4. Los recursos de dichos sistemas son inembargables.

Art. 2º — Modificase el artículo 16 de la ley 24.241, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 16: *Naturaleza del régimen y garantía del Estado.*

1. El régimen previsional público es un régimen de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad.

Sus prestaciones serán financiadas con los recursos enumerados en el artículo 18 de esta ley.

¹ Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 21 y 22 de diciembre de 1994, página 4970.)

2. El Estado nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones establecidas en este capítulo, hasta el monto de los créditos presupuestarios expresamente comprometidos para su financiamiento por la respectiva ley de presupuesto.

Art. 3º — Modificase el artículo 17 de la ley 24.241 al que se incorporan los siguientes párrafos:

- f) Prestación por edad avanzada.

La ley de presupuesto determinará el importe mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del régimen previsional público.

Ningún beneficiario tendrá derecho a recibir prestaciones por encima del tope máximo legalmente determinado.

Art. 4º — Modificase el artículo 18 de la ley 24.241 el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 18: *Financiamiento.* Las prestaciones de régimen previsional público serán financiadas exclusivamente con los siguientes recursos:

- a) Los aportes personales de los afiliados comprendidos en el régimen previsional público
- b) Las contribuciones a cargo de los empleados, establecidas en el artículo 11 de esta ley
- c) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete (27), correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos;
- d) La recaudación del impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico y otros tributos de afectación específica al sistema jubilatorio;
- e) Los recursos adicionales que anualmente fija el Congreso de la Nación en la ley de presupuesto;
- f) Intereses, multas y recargos;
- g) Rentas provenientes de inversiones;
- h) Todo otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen previsional público.

Art. 5º — Modificase el artículo 32 de la ley 24.241, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 32: *Movilidad de las prestaciones.* Las prestaciones del régimen previsional público tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto conforme al cálculo de recursos respectivo.

Art. 6º — Sustitúyese el artículo 34 de la ley 24.241 por el siguiente:

Artículo 34:

1. Los beneficiarios de prestaciones del régimen previsional público podrán reingresar a la actividad remunerada tanto en relación de dependencia como en carácter de autónomos.
2. El reingresado tiene la obligación de efectuar los aportes que en cada caso correspondan.

dan, los que serán destinados al Fondo Nacional de Empleo.

3. Los nuevos aportes no darán derecho a reajustes o mejoras en las prestaciones originarias.
4. Los beneficiarios de prestaciones previsionales que hubieren accedido a tales beneficios amparados en los regímenes especiales para quienes presten servicios en tareas penosas, riesgosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro, no podrán reintegrarse a la actividad ejerciendo algunas de las tareas que hubieran dado origen al beneficio previsional. Si así lo hicieren, se les suspenderá el pago de los haberes correspondientes al beneficio previsional otorgado.
5. El goce de la prestación del retiro por invalidez es incompatible con el desempeño de cualquier actividad remunerada.
6. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el artículo 12 de la presente ley, el empleador deberá comunicar la situación a que se refiere el apartado 1 de este artículo a la autoridad de aplicación, en el plazo y con las modalidades que la misma establezca. La omisión de esta obligación hará pasible al empleador de una multa equivalente a diez (10) veces lo percibido por el beneficiario en concepto de haberes previsionales.

Art. 7º — Movilidad de las prestaciones.

1. La movilidad de las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional, por períodos anteriores a la promulgación de la presente ley se regirán por los siguientes criterios:

- a) Las prestaciones correspondientes a períodos anteriores al 1º de abril de 1991 se ajustarán según el índice definido en el anexo 1 de esta ley;
- b) Las prestaciones correspondientes a períodos comprendidos entre el 1º de abril de 1991 y la fecha de promulgación de la presente ley se ajustarán según las disposiciones oportunamente aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y por organismos de su dependencia.

2. A partir de la vigencia de la presente ley todas las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto. Dicha movilidad podrá ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las prestaciones mínimas.

En ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos.

Art. 8º — Mejora de los haberes mínimos. Las futuras leyes de presupuesto destinarán preferentemente los mayores recursos que se asignen anualmente en las mismas, así como los eventuales excedentes del régimen pre-

visional público, a mejorar las prestaciones de los beneficiarios que carezcan de otros ingresos y perciban prestaciones previsionales inferiores a los cuatrocientos cincuenta pesos (\$ 450).

Art. 9º — Haberes máximos.

1. Las prestaciones que se otorguen después de la sanción de la presente ley y en virtud de leyes anteriores a la 24.241 tendrán el tope máximo establecido en la ley respectiva.

2. Los haberes previsionales mensuales correspondientes a las prestaciones otorgadas en virtud de leyes anteriores a la ley 24.241 que no tuvieren otro haber máximo menor, en la suma equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) del monto máximo de la remuneración sujeta a aportes y contribuciones, prevista en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley 18.037, modificado por el artículo 158 apartado 1 de la ley 24.241, estarán sujetos a la siguiente escala de deducciones:

- De \$ 3.101 a \$ 4.000: 6 % sobre el excedente de \$ 3.100.
- De \$ 4.001 a \$ 6.000: \$ 54 más el 12 % sobre el excedente de \$ 4.000.
- A partir de \$ 6.001: \$ 294 más el 30 % sobre el excedente de \$ 6.000.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adecuar la escala precedente a las movilidades que resulten de la suma equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) del monto máximo de la remuneración sujeta a aportes y contribuciones.

3. Hasta tanto la ley de presupuesto cumpla con lo establecido en el artículo 17 de la ley 24.241, el monto del haber máximo del régimen previsional público que regula la referida ley y correspondiente a las prestaciones que se otorguen después de la sanción de la presente no podrá superar los tres mil cien pesos (\$ 3.100).

Art. 10. — Orden público.

1. La presente ley es federal y de orden público.
2. No se aplicará retroactivamente respecto de haberes correspondientes a períodos anteriores a su entrada en vigencia.

Art. 11. — Derogación.

1. Deróganse los artículos 82 de la ley 18.037 y 125, 158 inciso 6, y 160 de la ley 24.241, así como toda otra disposición que se oponga a la presente ley.
2. Derógase el decreto 2.302/94 a partir de la promulgación de la presente ley.

CAPÍTULO II

Reforma al procedimiento judicial de la seguridad social

Art. 12. — El procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la Administración Nacional de Seguridad Social, se regirá por las disposiciones del presente capítulo.

Art. 13. — Las resoluciones de la Administración Nacional de Seguridad Social podrán ser impugnadas ante

los juzgados federales en lo contencioso-administrativo de la Capital Federal y ante los juzgados con asiento en las provincias, dentro del plazo de caducidad previstos en el artículo 25 inciso a) de la ley 19.549, mediante demanda de conocimiento pleno, que tramitará por las reglas del proceso sumario previsto en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación, con las modificaciones introducidas en la presente ley. La Administración Nacional de Seguridad Social actuará como parte demandada.

Art. 14. — La Administración Nacional de Seguridad Social podrá articular en su defensa la limitación de recursos en el régimen de reparto para atender el mayor gasto que se derivaría del acogimiento de las pretensiones del actor y su eventual extensión a los casos análogos.

Art. 15. — Sólo se admitirán los medios probatorios documentales, testimoniales, periciales, de informes y los que el tribunal dispusiere para mejor proveer, salvo que la Administración Nacional de Seguridad Social articule la defensa de limitación de recursos en el régimen de reparto, en cuyo caso se admitirá también la prueba pericial correspondiente, a ser diligenciada por integrantes del cuerpo de peritos o funcionarios de la Auditoría General de la Nación.

Art. 16. — La Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, creada por ley 23.473, se transformará en Cámara Federal de la Seguridad Social y conocerá en la materia enumerada en el artículo 39 bis del decreto ley 1.285/58, con la salvedad de que en lo concerniente del inciso a) de dicho artículo intervendrá en grado de apelación contra las sentencias dictadas por los juzgados mencionados en el artículo 13.

Art. 17. — La sentencia definitiva de la Cámara Federal de la Seguridad Social será apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso ordinario, cualquiera fuere el monto del juicio. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán de obligatorio seguimiento por los jueces inferiores en las causas análogas.

Art. 18. — Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hubiere pronunciado reiteradamente en casos análogos respecto a la aplicación de la presente ley, podrá rechazar *in limine* el recurso interpuesto, sin otra fundamentación.

Art. 19. — Las costas serán por su orden.

Art. 20. — Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de Seguridad Social serán cumplidas dentro de los noventa (90) días de notificadas, hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera el plazo. Agotados dichos recursos se suspenderá el cumplimiento de aquellas sentencias pendientes de pago, reanudándose el cómputo de los plazos para su cumplimiento a partir del comienzo del año fiscal para el que se aprueben nuevos recursos presupuestarios destinados a atender sentencias judiciales y hasta su nuevo agotamiento. La Administración Nacional de Seguridad Social deberá respetar estrictamente el orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas para su cumplimiento, salvo cuando queden sentencias pen-

dientes de cumplimiento para el siguiente período fiscal, en cuyo caso dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Serán de aplicación las leyes 23.982 y 24.130, y supletoriamente la ley 3.952.

Art. 21. — En ningún caso los jueces podrán fijar un plazo distinto para el cumplimiento de las sentencias, ni aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas o conminatorias a los organismos respectivos, ni a los funcionarios competentes, salvo en los casos de amparo por mora. Quedan sin efectos las medidas de ese tipo que se hubieren adoptado o trabado. Los bienes y cuentas de la Administración Nacional de Seguridad Social o del Estado nacional son inembargables. Las autoridades administrativas competentes deberán tramitar de inmediato la interrupción o el levantamiento de las medidas compulsivas, cautelares o ejecutorias dispuestas con anterioridad a la presente ley, incluyendo las trabadas respecto a los bienes afectados al servicio de la Administración Nacional de Seguridad Social.

Art. 22. — Las normas previstas en el presente capítulo serán de aplicación inmediata a las causas en trámite. Las que estuvieren radicadas ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, pendientes de sentencia, serán convertidas al procedimiento previsto en la presente ley, notificando a los recurrentes para que adecuen su presentación al nuevo procedimiento, solicitando lo que en derecho corresponda. En estos casos, y por única vez, la Administración Nacional de Seguridad Social tendrá un plazo de seis (6) meses para contestar demanda y ofrecer pruebas, contados a partir de su notificación.

Art. 23. — Las sentencias dictadas o que se dicten en esta materia contra la Administración Nacional de Seguridad Social o el Estado nacional hasta el 31 de diciembre de 1995, que la condenen al pago de sumas de dinero, serán cumplidas recién a partir del 1º de enero de 1996, de acuerdo al procedimiento previsto en la presente ley.

Art. 24. — Modifícase el artículo 39 bis del decreto ley 1.285/58, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 39 bis: La Cámara Federal de la Seguridad Social conocerá:

- a) En los recursos de apelación interpuestos en contra las sentencias dictadas en las causas suscitadas con motivo de impugnaciones judiciales contra resoluciones o actos administrativos que afecten pretensiones de los afiliados, beneficiarios, peticionarios de prestaciones o de afiliación, empleadores y, en general, de cualquier persona que alegare la afectación de su derecho respecto del régimen de reparto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- b) En los recursos interpuestos contra resoluciones que dicte la Dirección General Impositiva que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deuda determinadas por el citado organismo en ejercicio de las funciones asignadas por el decreto 507/93, siempre que

plazo de su interposición se hubiere depositado el importe resultante de la resolución impugnada;

- c) En los recursos interpuestos contra resoluciones de los entes que administran los subsidios familiares;
- d) En los recursos de apelación interpuesto contra resoluciones de la Comisión Nacional de Previsión Social, al decidir conflictos suscitados con motivo de la aplicación del régimen de reciprocidad instituido por el decreto 9.316/46;
- e) En los recursos de queja por apelación denegada y en los pedidos de pronto despacho de conformidad con el artículo 28 de la ley 19.549.

Art. 25. — Modifícase el artículo 9º de la ley 23.473, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 9º: Los recursos contencioso-administrativos enumerados en los incisos b), c) y d) del artículo 39 bis del decreto ley 1.285/58, deberán presentarse con firma de letrado y con expresión de agravios ante el mismo organismo administrativo que dictó la medida y dentro de los treinta (30) días de notificada si el interesado se domiciliare en la Capital Federal y de noventa (90) días si se domiciliare en el interior del país o en el extranjero. Si el interesado se domiciliare en el interior del país, podrá optar por presentar el recurso ante el juez federal de su domicilio, quien remitirá las actuaciones a la Cámara.

Art. 26. — Modifícase el artículo 11 de la ley 23.473, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 11: Interpuesto el recurso contencioso-administrativo y previa vista al ministerio público si la estimare necesaria, la Cámara Federal de la Seguridad Social resolverá en cada caso sobre la procedencia del recurso, de acuerdo a las constancias del expediente, sin perjuicio de las medidas que de oficio y para mejor proveer dispusiere. El control judicial recaerá sobre los hechos de las causas y el derecho aplicable.

Art. 27. — Derógase el artículo 14 de la ley 23.473.

TÍTULO II

Otras disposiciones

Art. 28. — Modifícase el artículo 33 de la ley 24.073, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 33: Los créditos fiscales a que se refiere el presente título se considerarán deudas del Estado nacional al 31 de marzo de 1991, una vez conformado su importe por la Dirección General Impositiva, a partir del ejercicio fiscal en el que hubieran correspondido su deducción de ganancias

sujetas a impuesto y hasta el importe imputable a cada ejercicio.

Tales deudas serán abonadas mediante la entrega de los Bonos de Consolidación en moneda nacional a dieciséis (16) años, creados por la ley 23.982, siendo de aplicación dicha norma legal y su reglamentación en cuanto no se oponga a lo previsto en este título.

Vencido el plazo que establezca la dirección y que no será menor de ciento ochenta (180) días los créditos se considerarán de oficio controvertidos y los reclamos correspondientes se deberán realizar según los procedimientos de la mencionada ley 23.982.

La modificación del artículo 33 de la ley 24.073 dispuesta en el primer párrafo del presente artículo no será de aplicación a los contribuyentes que —al tiempo de sancionarse la presente ley— ya hubiesen recibido los Bonos de Consolidación en el marco de los artículos 31 a 33 de la ley 24.073.

Art. 29. — Sustitúyese el inciso a) del punto 1 del artículo 4º del decreto 879 del 3 de junio de 1992, ratificado por el artículo 29 de la ley 24.307, con efectos retroactivos al 1º de julio de 1994, por el siguiente texto:

- a) El veinte por ciento (20 %) al Sistema de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.

Asimismo y como consecuencia de lo dispuesto precedentemente, déjase sin efecto el inciso b) del artículo 1º del decreto 1985 de fecha 26 de octubre de 1992.

Art. 30. — A partir del primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente ley, serán destinados al otorgamiento de subsidios a jubilados y pensionados del régimen contributivo nacional que perciban los menores haberes por todo concepto incluidos los subsidios ya vigentes el cincuenta por ciento (50 %) de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto establecido en los artículos 65 y 66 del capítulo IV del título II de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones.

Art. 31. — Excepto lo dispuesto en el artículo 30, la presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 33. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: ingresamos al tratamiento en particular del proyecto de ley sobre solidaridad previsional que el cuerpo aprobó en general durante el mes de diciembre del año pasado.

Como oportunamente adelantara nuestra bancada, vamos a introducir nuevos artículos en el proyecto de ley en análisis cuyos textos se encuentran a disposición de los señores diputados en sus respectivas bancas. Las modificaciones se refieren fundamentalmente al capítulo vinculado a la cuestión previsional y señalo que ellas aluden a la naturaleza del régimen de reparto y su garantía, al funcionamiento y al afianzamiento del sistema y, además, a la movilidad de las prestaciones y los haberes máximos.

También deseo expresar que el planteo del señor diputado Gauna vinculado con la derogación del decreto 2.302/94 está contemplado en estas modificaciones que introducimos; de manera que la cuestión será resuelta a partir del pronunciamiento del cuerpo.

Habida cuenta de que el capítulo vinculado a la reforma en el procedimiento judicial y la cuestión tributaria prácticamente no ha tenido modificaciones, creo pertinente que se ingrese en forma concreta al tratamiento en particular de los artículos cuyos nuevos textos obran en Secretaría y en poder de los señores legisladores.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Señor presidente: hemos entrado en la consideración de un proyecto de ley que lejos está de significar la solidaridad del sistema previsional y que viene a plantear la necesidad de discutir sobre la emergencia de dicho sistema.

A partir de este tema el Poder Ejecutivo insiste en cargar sobre el sistema jubilatorio todos los males y las penurias de la política económica: es el sistema jubilatorio el que desequilibra el presupuesto, a punto que ha provocado el pedido de una ampliación del presupuesto el año pasado por primera vez. Son los juicios de los jubilados los que están bombardeando este modelo puesto en marcha. Estas afirmaciones están muy lejos de la realidad que está viviendo hoy la Argentina.

El desequilibrio de las cuentas fiscales está relacionado fuertemente con la caída de la actividad económica que comenzara en el último trimestre del año 1994 y que se viene acrecentando a partir de este año. Pero resulta que son nuevamente los jubilados los patos de la boda, los que tienen que sufrir un nuevo ajuste para ver si el ministro Cavallo puede cerrar sus cuentas.

Estamos tratando este tema con el mayor de los pesares, porque este proyecto de ley de

emergencia previsional lo que está cerrando fundamentalmente, es un régimen basado específicamente en la solidaridad; esto es, que una generación sea la que termine sustentando a la otra, con el objeto de que, cuando se esté en la pasividad, los hijos o los nietos alimenten en definitiva el sistema.

Todos los derechos a los que se accede luego del cumplimiento de determinados requisitos —30 años de aportes y 60 o 65 de edad— se ponen en cuestionamiento, porque a nadie se le pregunta si tiene o no dinero para hacer sus aportes o sus contribuciones; pero cuando llega el momento de ejercer el derecho —cobra la jubilación—, el Estado termina diciendo que pagará en la medida en que tenga plata. Por lo tanto, estamos poniendo al sistema previsional una fuerte limitación por el lado de los recursos.

Se dice que los recursos son "hasta aquí", pero lo que no se limita en este proyecto son los gastos. No hay ninguna limitación para que el gobierno siga incluyendo —como lo ha venido haciendo a lo largo de todo el año 1994, fundamentalmente—, nuevas cargas sobre la estructura del sistema previsional. En este sentido, pensemos en la baja de las contribuciones patronales, en la transferencia de las cajas provinciales, en la inclusión de las pasividades militares y en la precancelación de bonos. Todo esto fue cargado al sistema previsional y contribuyó a su desfinanciamiento. Hoy se alega que son los juicios basados en reclamos legítimos de los jubilados los que están def financiando el sistema.

La Presidencia se debe acordar que cuando el ministro de Economía estuvo aquí en la interpelación del 2 de noviembre del año pasado, se comprometió a darnos los números que justificarian por qué los juicios estarían desequilibrando el sistema previsional. Cuando este tema fue vuelto a discutir en el mes de diciembre los números todavía no habían llegado, pero lo cierto es que se comprometieron a traérselos antes del 8 de febrero, fecha en la que reiniciaríamos el debate, con lo que cada uno de nosotros tendría la posibilidad de analizar los números de este fenomenal desequilibrio del sistema previsional.

Esos números siguen sin aparecer. ¿Alguien puede creer que el ministro Cavallo no tiene los números de este desequilibrio del sistema previsional? ¿Alguien puede creer que todavía no hicieron esas cuentas? Lo cierto es que tienen esos números y que ellos demuestran que nosotros tenemos razón cuando afirmamos que no es

con los juicios como se desequilibra el sistema previsional. Sin embargo, independientemente de esto, se sigue mintiendo, cargando las tintas, suspendiendo los juicios y, sobre todo, suspendiendo los derechos de los trabajadores.

Si esta norma que estamos considerando se hubiera mantenido tal cual la habíamos aprobado en general en el mes de diciembre del año pasado, quizás hoy la habríamos acompañado, pero nos encontramos con que nos resulta imposible votar afirmativamente los artículos que fueron incorporados por la bancada Justicialista.

Han declarado la muerte al sistema de reparto, y lo han hecho cuando las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones cerraron el 31 de diciembre del año pasado el balance de los primeros seis meses con una rentabilidad negativa del 0,5 por ciento. El sistema de capitalización iba a ser la panacea para que los ciudadanos pudieran juntar dinero hacia el futuro; el gobierno decía que había que pensar en tasas del 4 o del 5 por ciento de rentabilidad y las AFJP hablaban de tasas del 7 u 8 por ciento. Sin embargo, los primeros seis meses de gestión arrojaron un 0,5 por ciento de rentabilidad negativa para ese sistema, lo que significa que por cada peso que la gente colocó queda todavía un poco menos.

Queda el sistema de reparto, que fue elegido por el cincuenta por ciento de los trabajadores; pero a partir de este proyecto se intenta destruir la que era una de las tablas seguras hacia el futuro de cada uno de los aportantes. El bloque oficialista se convierte en responsable de la destrucción de un régimen solidario. La solidaridad se aplica fundamentalmente para que, cuando tenga la posibilidad de jubilarme, el esfuerzo que realicé durante 30 años me permita vivir dignamente.

El gobierno ha tenido una política específica en relación con el sistema jubilatorio. A veces suelen preguntarnos: ¿Ustedes creen que somos macabros y que si tuviéramos el dinero no lo transferiríamos a los jubilados? ¿Qué mejor acto electoral podríamos hacer que aumentar las jubilaciones mínimas? Esto es absolutamente falso, porque cuando tuvieron la plata para aumentar a los jubilados priorizaron bajar el costo argentino y disminuyeron las contribuciones patronales en vez de dar ese dinero a los pasivos.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia advierte al señor diputado que debe referirse al artículo 1º.

Sr. Santín. — Señor presidente: estoy hablando exclusivamente del artículo 1º. Lo que ocurre

es que en él se intenta definir cuál es el régimen previsional en la Argentina, y esta redefinición equivale a romper con la cadena solidaria de la seguridad social.

A medida que se vayan considerando los distintos artículos iremos haciendo las argumentaciones correspondientes, pero desde ya expresamos que lamentamos profundamente que el bloque oficialista, que en el mes de diciembre había asumido una actitud racional frente al sistema previsional argentino, haya caído ahora bajo la presión del Poder Ejecutivo y entregado los principios que quedaban de la seguridad social.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Lafalla. — Señor presidente: quiero aclarar que no comparto la interpretación que del artículo 1º hizo el señor diputado preopinante. Este artículo —todos lo hemos leído y lo tenemos sobre nuestras bancas— no atenta en absoluto contra ninguna solidaridad. Muy por el contrario, introduce la cuota de sensatez necesaria, que es la base para ser solidarios.

Este artículo dice que no se va a pagar lo que no hay. A mí personalmente no me tiembla el pulso al decirle a mi padre jubilado que no hay, si no tengo, porque a mi hijo le digo lo mismo y yo actúo bajo idéntica premisa. Hay una cultura de creer que hay soluciones políticas para las matemáticas y que la solidaridad es gastar lo que no se tiene; pero esto es insensatez, aquí y en cualquier lugar, y un insensato no puede ser solidario.

Entonces éste es el artículo de la sensatez reforzada, porque es el Parlamento el que va a discutir lo que el diputado preopinante con razón quiere que discutamos: si hay más para los jubilados, para las fuerzas armadas o para gastos superfluos. El Congreso de la Nación es el que va a determinar cada año, solidaria y sensatamente, qué corresponde para los jubilados y para cada uno de estos rubros. Esto es lo que quería dejar sentado. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: tampoco comparto la interpretación que hizo de este artículo el señor diputado Santín y me pregunto de dónde viene esta expresión que afirma que no se va a pagar alguna prestación porque no hay recursos, cuando la propia ley está asignando a este sistema, en el artículo 4º, inciso e), los recursos adicionales que anual-

mente fije el Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara, doctor Carlos Ernesto Soria.

Sr. Durañona y Vedia. — Lo que se desea mediante este proyecto de ley — y es un logro importante en la legislación argentina — es establecer que el sistema previsional responde a un criterio de presupuesto, lo cual no debería significar a esta altura ninguna novedad. El Estado garantiza la ejecución de su presupuesto y, en el caso de haber demandas judiciales, se asignarán año tras año los recursos correspondientes a través del Congreso. Entonces, el Estado garantiza las demandas y ejecuciones que haya en su contra, y no veo que desaparezca la garantía porque se establezca con claridad que se trata de un sistema basado en el criterio del presupuesto disponible, que debe ser el imperante en toda disposición que mane de los poderes públicos para los actos de gobierno.

Por consiguiente, me parece que ha habido una discusión demasiado extensa sobre conceptos filosóficos, aspectos doctrinarios y el valor de la palabra "garantía", cuando en realidad basta con consignar en la norma el criterio presupuestario que la va a presidir para hacer innecesario el entrar en este tipo de discusiones y dogmatismos.

Yendo al terreno concreto de la discusión en particular de la iniciativa, quiero señalar al señor diputado Sueiro — quien amablemente actuó como miembro informante — que, seguramente por un defecto de técnica legislativa, los artículos 1º y 2º dicen lo mismo. El primer inciso del artículo 1º se refiere a los sistemas públicos de previsión de carácter nacional, que son sistemas de reparto asistidos basados en el principio de solidaridad; el artículo 2º habla en singular del régimen previsional público, que es un régimen de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad. Y así continúan repitiéndose los conceptos en ambos artículos, con la particularidad de que en el primero se utiliza el plural y en el segundo el singular.

Creo que esto es producto de las modificaciones que sufrió el proyecto original y habría que enmendarlo en el texto definitivo, ya que un solo artículo bastaría para consignar lo que reiteradamente se señala en los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz. — Señor presidente: frente a una situación de disenso generalizado originada por este proyecto del Poder Ejecutivo, las dos bancadas más importantes decidieron en el mes de diciembre buscar los puntos de coincidencia y los comunes denominadores a fin de dar una respuesta a este problema que inquietaba a la opinión pública.

En esa oportunidad se acordó una suerte de salvataje, ya que el proyecto original del Poder Ejecutivo era tan retrógrado en lo que hace al avance social de un país que no sabemos cómo hubiera terminado de no haber mediado esta buena predisposición.

Se llegó entonces a un acuerdo político y pese a que algunos partidos minoritarios se manifestaron en forma crítica al respecto, creo que el consenso alcanzado fue muy importante.

Lo cierto es que nosotros nos fuimos confiados de que existía una palabra empeñada por parte de quienes participamos de aquellas conversaciones. Con toda honestidad, soy muy respetuoso de la palabra empeñada; cada vez que un hombre da su palabra debe cumplirla porque esto hace al respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

Aquel dictamen, que contenía treinta y un artículos, fue aprobado en general por unanimidad. Si bien existía la posibilidad de que hoy fuera objeto de alguna modificación menor, sucede que a última hora de esta tarde prácticamente se ha confeccionado un nuevo proyecto. Por ello me he sentido muy sorprendido.

Cabe recordar que el proyecto de ley considerado en aquella ocasión contenía diversos aspectos: el aumento del monto total del presupuesto de la Nación, las reformas en materia fiscal con respecto al impuesto a las ganancias, el procedimiento judicial y todo lo vinculado con las reformas al régimen de reparto. En relación con este último aspecto había cuatro artículos, que hoy son once: se trata de una verdadera inflación. Tal vez esta cifra, por la que se ha más que duplicado el número de artículos, tenga algo que ver con los errores que ahora se le encuentran al Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Comparto plenamente las afirmaciones hechas por el señor diputado Santín en el sentido de que éste no es un proyecto de ley de solidaridad previsional sino un corsé que se le aplica al régimen de reparto para que, sin prisa pero sin pausa, termine en una agonía lenta y sea liquidado definitivamente en el país. Pero esto no es nuevo; ésta es la idea original del ministro Cavallo y de algunos otros funcionarios que en el

año 1992 comenzaron a frecuentar la Comisión de Previsión y Seguridad Social de esta Honorable Cámara.

Como recordarán, primero se habló del IEPPE, que lo rechazó el país. Luego vino el proyecto de reforma total del sistema previsional, por el que se transforma el régimen público en privado. A raíz de la oposición de distintas bancadas, incluso de algunos diputados del oficialismo, esa iniciativa se fue modificando y así se presentaron varios proyectos. Hubo un prolongado *impasse* hasta que finalmente la inclusión del artículo 40, que permitió que el Banco de la Nación Argentina actuara como administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, posibilitó que se concretara la sanción de la ley 24.241.

Lamentablemente, al poco tiempo hubo un decreto de necesidad y urgencia por el que se anuló ese artículo. Luego, en el mes de julio del año anterior, mediante la sanción de la ley 24.347, se modificó aquella otra norma. Como recordarán, ese día también hubo un compromiso en esta Cámara. A último momento se nos propuso que diéramos determinada orientación al artículo 30, con el compromiso de que el 15 de agosto de ese año la Cámara se reuniría con el fin de establecer la redacción definitiva. Pero no fue posible volver sobre el tema porque nunca más se quiso retocar ese artículo. Así, como antecedente de lo que ocurre hoy, se utilizó el procedimiento de ignorar la palabra empeñada.

Como ha señalado el señor diputado Santín, nos encontramos frente a un sistema de contrato intergeneracional basado en la solidaridad social. A lo largo de los años, en todos los países del mundo ese sistema se ha basado en dos grandes pilares: el aporte del trabajador y la contribución patronal. Pero cuando en el mundo comenzaron a notar que eso no alcanzaba porque el sistema maduraba y la tasa de sostenimiento era cada vez menor, incorporaron un tercer pilar: el Estado.

Ello no fue un invento argentino. Como ejemplo podemos señalar que en países como Bélgica, el Estado aporta el 28 por ciento; en Suiza, igual porcentaje, y en Suecia lo hace con un 25 por ciento. Otros países realizan aportes menores —como ocurre en el Reino Unido— pero tienen otras responsabilidades que tienden a atender este tema.

Ese fue el criterio que imperó en la Argentina durante mucho tiempo, es decir, el de tomar en cuenta los aportes y contribuciones. En algún momento la tasa de sostenimiento fue de 8 a 1, 7 a 1 o 6 a 1 pero cuando llegó a 1,5 a 1 —como ocurrió hace dos años— la situación se tornó insostenible.

Lamentablemente este sistema no funcionó porque se produjeron tres grandes extracciones de dinero: la primera ocurrió en 1952, la segunda en 1967 y la tercera en los dos últimos años. En las dos primeras oportunidades se reemplazó el 28 por ciento del PBI de las cajas por bonos a bajo interés y en el último caso se desviaron cuatro mil millones de pesos del sistema para atender otras cuestiones: la caja de retiros militares, el rescate de Bocones y los gastos de la Dirección General Impositiva. Estos datos indican que el sistema no está condenado a muerte: lo que ocurre es que cada tanto le quitan recursos y es necesario recurrir a remiendos como el que ahora estamos considerando.

Lamentablemente ahora vemos la muerte próxima del sistema de reparto porque, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo editó una revista —denominada "Para que elijas bien"— en la que aconseja a la gente que se afilie a una administradora de fondos de pensión. También publicó una solicitada mediante la que aclaró que el sistema privado está garantizado, cosa que no es cierto; inclusive, el señor Francisco Murolo tuvo que salir a aclarar esta situación.

Ahora le están dando un último empujón y el certificado de defunción al sistema de reparto.

Por las razones expuestas considero erróneo el sistema que se propone, sobre todo si tenemos en cuenta que el señor ministro Cavallo de ninguna manera tiene una inquietud de tipo social sino un mero criterio economicista, ya que está al servicio de los grandes intereses económicos y para nada le importan los pobres y los jubilados.

Sr. Presidente (Soria).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.).— Señor presidente: teniendo en cuenta las expresiones vertidas por el señor diputado preopinante resulta pertinente aclarar algunos conceptos.

En primer lugar, cuando se habla de un régimen solidario en el que sólo se tendrán en cuenta los aportes y contribuciones entendemos que no es correcto el argumento que se está utilizando, porque según ese criterio en caso de que no existieran fondos para pagarse los haberes de los actuales jubilados o de quienes en el futuro se acojan a este régimen se dejarían de hacer efectivos los beneficios que corresponden a las personas que se han jubilado. Ello se condice con los fundamentos de decreto de emergencia que en su oportunidad firmó el doctor Alfonsín, mediante el cual suspendió el pago de los juicios a los jubilados en virtud

de la crisis por la que atravesaban las cajas de jubilaciones. En ese momento se argumentó que no podía repartir lo que no existía.

Corresponde aclarar que lo que estamos buscando con la redacción del artículo en consideración es exactamente lo contrario de lo que aquí se ha expresado, porque decimos que al margen de lo que debe recaudar el sistema también el presupuesto nacional puede adicionar otros fondos para que el Estado se responsabilice del pago de las prestaciones.

Entonces el argumento que se utiliza no es correcto. La definición del régimen es más amplia y tiende a garantizar que el Estado nunca va a dejar de cumplir con las obligaciones que tiene con los jubilados en el régimen público de reparto.

Parecería que no se quiere interpretar correctamente la redacción del artículo 1º, que guarda conexión con el 4º, que se refiere al total de recursos con que van a contar las distintas cajas para afrontar las erogaciones del sistema de reparto.

Quería efectuar esta aclaración porque, en caso contrario, podría pensarse que se quiere quitar la garantía a los jubilados y pensionados, en el sentido de que el Estado no les va a abonar cuando no tenga más dinero. La situación es totalmente inversa. Estamos garantizando que mediante la ley de presupuesto siempre exista dinero suficiente, no sólo para pagar, sino también para reajustar los haberes cuando ello corresponda.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. López Arias. — Señor presidente: antes de pasar a votar este artículo y, como hemos efectuado consultas con otros bloques para poder avanzar en el debate dado que tenemos quórum estricto, quiero expresar que nuestra intención es la de continuar con el análisis de todo el capítulo I para luego votar separadamente cada uno de sus artículos. Quisiera saber si existe acuerdo para adoptar este procedimiento.

Sr. Presidente (Soria). — Entonces se avanzaría en la discusión de los artículos del capítulo I; luego se pondría a votación artículo por artículo. Si hubiere asentimiento, así se procederá.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Señor presidente: en primer lugar quiero formular una aclaración a los señores diputados Durañona y Vedia, y Lafalla. Ellos mencionaron el criterio de presupuesto, que me

parece fantástico, pero para poder aplicar sólo se necesitó conocer cuáles son los recursos y los gastos.

Aquí nos encontramos con que esta iniciativa no define los recursos específicos del sistema, que siguen estando en discusión; hasta tal punto ello es así que el proyecto no se anima a enumerarlos en el artículo 4º. Por otro lado, tampoco señala cuáles son los gastos del sistema. En consecuencia, frente a esta base, ¿de qué presupuesto se habla? Planteado el tema en estos términos, ¿cuál es el criterio presupuestario que presenta el sistema previsional?

Esta es una farsa presupuestaria porque lo único que hacemos es poner un tope a la cantidad de recursos que se tendrá; no se dice en qué se va a gastar en el sistema previsional. Entonces continuamente efectuamos cambios.

El año pasado formulé una denuncia penal por la malversación por parte del Poder Ejecutivo de 4 mil millones de pesos que correspondían al sistema previsional.

Estaría absolutamente conforme —se lo he planteado al bloque oficialista— si se utilizara un criterio de caja, es decir, si se enumeraran taxativamente en la ley las prestaciones incluidas en el sistema de reparto público y los recursos con que se cuenta, y por otra parte todo aquello que no integra dicho sistema, como por ejemplo las pasividades militares, las prestaciones no contributivas como las pensiones graciables, las transferencias de cajas provinciales y lo relacionado con la baja de las contribuciones patronales. Bajo este marco estamos absolutamente de acuerdo en establecer el criterio presupuestario. Todo el resto es verso; por eso esto es verso: con este proyecto se pretende dejar sin recursos al sistema previsional. El diputado preopinante señaló que de esta forma se garantiza el sistema, pero así no garantizamos nada a nadie; de lo contrario no se modificaría el artículo 16, que establece que el Estado nacional garantiza el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este título, las que se financiarán a través del régimen de reparto. Si quisiéramos dar garantías no modificaríamos este artículo.

Además, en el artículo 2º de este proyecto se dice que se va a pagar en la medida en que la plata alcance. Dejémonos de engañar a la gente y digamos que el sistema jubilatorio en la Argentina trata de resolver por inanición, pero no de plata sino de los jubilados; y cuando pasemos de 3,5 millones a 2 millones de beneficiarios entonces podremos financiarlo.

Sr. Presidente (Soria). — Restan dos minutos del tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra, señor diputado.

Sr. Santín. — Sólo me he referido al artículo 1º, señor presidente.

Sr. Presidente (Soria). — ¿Va a exponer sobre todos los artículos?

Sr. Santín. — Sí, señor presidente.

Sr. López Arias. — No tenemos inconveniente en que así sea.

Sr. Gauna. — Señor presidente: quiero dejar constancia de que no estoy de acuerdo con el procedimiento de discutir los artículos en forma conjunta, porque luego llegan los diputados para votar y no tienen idea de los argumentos que se han desarrollado.

Más allá del acuerdo que aparentemente existe, quiero dejar constancia de que me opongo a este procedimiento y solicito que se trate artículo por artículo y se vote en cada caso.

Sr. Presidente (Soria). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Si hay acuerdo podemos tratar artículo tras artículo votándolos al final; de lo contrario ese procedimiento no es viable.

Sr. Presidente (Soria). — Supuse que el acuerdo existía ya que usted pretendía referirse a la totalidad de los artículos del capítulo I.

Sr. Santín. — Pero ocurre que el señor diputado Gauna acaba de formular una moción.

Sr. Presidente (Soria). — El diputado Gauna hizo una observación pero no la planteó a modo de moción: por ese motivo no la sometí a consideración de la Honorable Cámara.

Sr. Santín. — En todo caso tampoco constituyen una moción las expresiones del señor diputado López Arias.

Sr. Pascual. — Señor presidente: el señor diputado López Arias formuló una sugerencia a efectos de facilitar el tratamiento de este proyecto. Luego de las consultas correspondientes, en nuestro bloque no hemos llegado a un acuerdo total que permita adoptar el procedimiento propuesto, y por ello debemos atenernos a lo que establece el reglamento.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: creo que existe la necesidad de que se precise cómo es esta discusión en particular porque entiendo que no nos hemos movido del artículo 1º, a estar a los dichos de los señores diputados Gauna y Pascual, y sin embargo el señor dipu-

tado Santín ha hecho uso de la palabra en dos oportunidades, circunstancia que no me afecta en absoluto porque tengo mucho gusto en escucharlo; pero quiero significar que es necesario que se indique bien cómo será la discusión en particular y qué orden vamos a llevar durante el debate.

Quería señalar al señor diputado Santín que comprendo que en sus expresiones haya cierto fervor en defensa de sus convicciones y por ello creo que no hay en su espíritu ninguna idea de causar agravio o molestias cuando utiliza expresiones tales como "dejemos de engañar a la gente" y otras por el estilo; pero en mi carácter de legislador digo que estoy conforme con el texto de este artículo 1º y no tengo la idea de engañar a nadie. En este sentido quiero expresar al señor diputado Santín que también debe respetar criterios que le son opuestos y enteramente objetivos.

Me parece que un sistema que se basa en la libertad más grande que hay en el sistema republicano, que es la que tiene el Congreso de atribuir recursos, no puede decirse que sea un régimen que está limitando los recursos, salvo que se piense que ésta será una predisposición del Parlamento.

Supongo que año tras año el Congreso atenderá las circunstancias en que viva el país y que, como en todo otro tema, asignará los recursos que se crean prudentes, que pueden ser muchos o pocos, limitados o extensos, según las situaciones que los representantes del pueblo adviertan en cada año.

De manera que no creo que este proyecto de ley contenga una definición tan tajante como la que sostiene el señor diputado Santín en cuanto a la idea de negar recursos o de no pagar porque no hay dinero, sino que está dejando en manos del Parlamento, que es donde debe adoptarse esa decisión, la posibilidad de fijar año a año los recursos que se consideren necesarios.

De todas formas pienso que este debate parece que fuera un contrapunto que se motiva en la peculiar forma de la discusión iniciada en particular y por ello se precisa saber cuál es el orden en el uso de la palabra y el artículo al que nos estamos refiriendo.

Sr. Presidente (Soria). — El señor diputado López Arias ha formulado una propuesta que sugiere una posición.

Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. López Arias. — Señor presidente: quiero aclarar que no he formulado una moción en el

sentido que establece el reglamento, sino que efectúe una consulta a los efectos de determinar si habría asentimiento.

Ante la falta de quórum no quiero someter a votación la cuestión y por eso he buscado el asentimiento para continuar deliberando. Si no hay asentimiento, entonces retiro lo manifestado, y haremos el esfuerzo necesario para lograr quórum y votar el artículo 1º.

Sr. Presidente (Soria). — El señor diputado López Arias ha formulado una sugerencia: o bien considerar artículo por artículo y votarlos en su orden, o bien continuar con la discusión de los artículos que integran el capítulo I para después votarlos uno por uno.

El señor diputado Gauna ha formulado una moción para que se discuta artículo por artículo según su orden.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Tampoco he formulado una moción, señor presidente. No soy quién para obstruir el trabajo de la Cámara, pero me parece que estamos ante una ficción.

Se está discutiendo artículo por artículo. Hay señores diputados que ya han hablado sobre el artículo 1º. Se presupone que hacemos uso de la palabra para convencernos unos a otros. Pero resulta que esta práctica de considerar todo un capítulo para votarlo al final por estos problemas que se suscitan con el quórum, transforma el debate en una verdadera ficción. Entonces, no entiendo esto de tratar artículo por artículo si los casi ochenta diputados que faltan para lograr el quórum cuando concurren al recinto no habrán escuchado ninguno de los argumentos dados durante la discusión.

No tengo ningún ánimo de obstaculizar el trabajo de esta Cámara, pero como todos los que estamos aquí presentes nos quedamos para la discusión en particular, merecemos también el respeto de aquellos que se fueron, porque la idea es considerar este tema con la seriedad que corresponde, por tratarse de una norma de esta magnitud y de estas características.

Este es el sentido que quiero dar no a mi obstrucción sino a una reflexión para todos los que seguimos aquí sentados desde la hora 18.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Lafalla. — Señor presidente: no hay ninguna moción; sólo una sugerencia que fue retirada. Por lo tanto, lo que está en discusión es el artículo 1º.

Sr. Presidente (Soria). — No habiéndose logrado consenso, la Presidencia reglamentariamente debe someter a votación el artículo 1º.

No habiendo número, se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Subsistiendo la falta de número, se va a pasar lista.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: quiero recordar que en su oportunidad este cuerpo solicitó y facultó a la Presidencia para que en los casos en que ocurran hechos como el que presumiblemente va a suceder ahora —es decir, que no podamos continuar trabajando por falta de quórum— se publique la lista de los diputados ausentes. En consecuencia, solicito que la Presidencia proceda de acuerdo con lo que la Cámara oportunamente le ha indicado.

Asimismo, en la eventualidad de que no se reuniera el quórum suficiente para seguir sesionando, propongo que se pase a cuarto intermedio hasta luego a las 10 de la mañana.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Herrera Arias. — Señor presidente: considero que debe darse a conocer públicamente la nómina de los señores diputados presentes.

Por otra parte, cuando el cuerpo es citado a sesionar a una determinada hora, una vez vencidos los términos reglamentarios cae automáticamente la sesión. Es fundamental el cumplimiento del horario de comienzo de la sesión, porque no es posible que se cite al cuerpo para las 15 y que se comience a las 22. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Por Secretaría se procederá a pasar lista.

—Se pasa lista, registrándose la presencia de 114 señores diputados.

—Al pase de lista se encuentran presentes los señores diputados: Abasto, Abihaggle, Aceñolaza, Alcala, Algaba, Alvarez (C. R.), Alvarez Garcia, Aranda, Argüello, Arias, Avrechca, Ayala, Balestrini (M. A.), Barberá, Barrionuevo, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Bermúdez, Bianchi Silvestre, Borda, Bracchi, Branda, Bultrich, Cibirón, Callaba, Cámara, Castillo (J. L.), Castro, Crostelli, D'Ambro-

sio, D'Elia, Daud, Donni, Drisaldi, Durañona y Vedia, Durrieu, Fabrissin, Funes, Galante, García Moreno, Gauna, Gazia, Giménez (D. A.), Giménez (R. F.), Golpe (C. H.), Conzález, González Cabañas, Green, Guzmán, Hardy, Hernández, Herrera Arias, Humada, Jaunarena, Kammerath, Kelly, Kessler, Lafalla, Lamberto, Leguizamón, López (J. A.), López Arias, Macedo, Maqueda, Marcos, Matzkin, Mendoza (C. R.) Menem, Mercader, Mercado Luna, Migliozi, Miralles de Romero, Molardo, Müller, Muniagurria, Neder, Niño, Novau, Orquín, Parada, Parola, Pascual, Peláez, Pernasetti, Perrini, Pichetto, Ré, Rodríguez (Jesús), Rodríguez (M. E.), Rodríguez Sañudo, Roig, Rojo, Romero

(C. A.), Romero (H. A.), Roy, Rubini, Sampietro, Sebastiani, Smith, Sobrino, Soria, Sucaria, Sueiro, Teodosiu, Tolomeo, Toma, Toto, Trettel Meyer, Troyano, Valcarcel, Varela Cid, Venesia y Vicchi.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — En uso de las facultades reglamentarias, invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta luego a las 10 horas.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 1 y 25 del día 9.

FULVIO F. RAMOS.
Director del Cuerpo de Taquigrafos.